

Co.: Argen: Suc. 43 (b)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

22ª REUNIÓN — 9ª SESIÓN ORDINARIA (Continuación) — 1º DE SEPTIEMBRE DE 1994

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM,
y del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P.V. MURGUÍA

Prosecretario: señor JUAN JOSÉ CANALS

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
JUÁREZ, Carlos A.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge

MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOLINA, Pedro E.
PEÑA de LÓPEZ, Ana
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SNOPEK, Guillermo E.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

AVELÍN, Alfredo
OTERO, Edison
OYARZÚN, Juan Carlos
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.

EN COMISION:

SÁNCHEZ, Libardo N.

SUMARIO

1. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Derechos y Garantías en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo y en el proyecto de ley del señor senador Alasino, por los que se modifican los códigos Penal y Procesal Penal de la Nación en lo referido a la prisión preventiva (P.E.-549 y S.-1.424/93). Se aprueba con modificaciones. (Página 2268.)

Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución del señor senador de la Rúa, por el que se exalta la importancia de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (S.-1.424/93). Se aprueba. (Página 2283.)

2. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña, por el que se solicitan informes sobre un convenio bilateral con la República del Paraguay para establecer una regulación de los recursos naturales compartidos (S.-1.454/93). Se aprueba. (Pág. 2286.)
3. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Mazzucco, por el que se solicita la elaboración de un protocolo para el medio ambiente en el marco del Grupo Mercado Común del Tratado de Asunción (S.-1.480/93). Se aprueba. (Pág. 2287.)
5. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Mazzucco, por el que se solicita se proponga a los gobiernos integrantes del Tratado de Asunción del Grupo Mercado Común la constitución de un subgrupo de trabajo especializado en cuestiones ambientales (S.-1.482/93). Se aprueba. (Pág. 2288.)
6. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña, por el que se solicitan informes sobre el cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (S.-1.760/93). Se aprueba. (Pág. 2289.)
7. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Bordón, por el que se solicitan informes sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur (S.-1.807/93). Se aprueba. (Pág. 2300.)

8. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de los señores senadores Ludueña y Storani, por el que se expresa beneplácito por las tratativas tendientes a crear una nueva área protegida en la Quebrada de los Condoritos, Córdoba (S.-1.895/93). Se aprueba. (Pág. 2301.)
9. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen, por el que se solicitan informes sobre el convenio suscrito con la organización Humedales para las Américas por parte de la compañía Astra Capsa (S.-1.942/93). Se aprueba. (Pág. 2303.)
10. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes sobre la situación forestal de la selva subtropical misionera (S.-2.061/93). Se aprueba. (Pág. 2304.)
11. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari, por el que se solicitan informes sobre la tala de árboles en la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.068/93). Se aprueba. (Pág. 2305.)
12. Consideración del dictamen de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Martínez Almuvar, por el que se solicitan informes sobre el cumplimiento de la ley sobre prevención de los recursos del aire (S.-2.113/93). Se aprueba. (Página 2306.)
13. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita se respete la vigencia de las líneas de Bases y Delimitación de Espacios Marítimos (S.-1.737/93). Se aprueba. (Pág. 2306.)
14. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de los señores senadores Ludueña y Cafiero, por el que se solicitan informes sobre la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (S.-1.809/93). Se aprueba. (Pág. 2308.)
15. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Pesca en dos proyectos de comunicación, uno del señor senador Ludueña y el otro del señor senador Solari Yrigoyen, por el que se solicita que se dé instrucciones a la representación argentina en la XLVI Reunión Anual de la Comisión Ballenera Internacional (S.-1.952 y 2.213/93). Se aprueba otro proyecto de comunicación. (Pág. 2311.)
16. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el

sanche de calzada del corredor 38 en el tramo "García Fernández (Tucumán) - Acceso Norte (Catamarca)", en el sector Famaillá-Aguilares (S.-485/94). (Pág. 2594.)

254. A moción de la señora senadora Rivas se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autora por el que se solicita se incluya en el presupuesto para 1995 la partida correspondiente para la realización de las obras del camino que une la localidad de Alpachiri, en Tucumán, con la de Andalgala, en Catamarca (S. 529/94). (Pág. 2595.)
255. A moción de la señora senadora Rivas se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autora por el que se solicita que una partida del presupuesto de 1995 se destine para el funcionamiento de un anexo de la Universidad Tecnológica Nacional, en Alberdi, Tucumán (S.-533/94). (Pág. 2596.)
256. A moción del señor senador Branda se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones, por la Cámara constituida en comisión, el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se transfieren tierras a la provincia de Formosa y al Estado Mayor General del Ejército en el departamento de Pirané de la referida provincia (P.E.-56/94). (Pág. 2596.)
257. A moción de la señora senadora Peña de López se retira el pedido de tratamiento sobre tablas que ella efectuara para el proyecto de resolución del que es autora por el que se expresa adhesión a la proclamación del corriente como Año Internacional de la Familia (S.-461/94). (Pág. 2599.)
258. A moción del señor senador Bordón se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita se prohíba el ingreso de frutas frescas fuera de temporada (S.-329/94). (Pág. 2600.)
259. Moción de preferencia formulada por el señor senador Cendoya para tratar en la próxima sesión con dictamen de comisión o sin él, el proyecto de resolución del que es autor junto con el señor senador Storani por el que se invita a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a fin de que informen sobre el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (S.-608/94). Se aprueba. (Pág. 2601.)
260. Consideración del proyecto de ley del señor senador León por el que se deroga el decreto 1.193/94, de creación en jurisdicción de la Presidencia de la Nación de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Comunidad (S.-668/94). Se levanta la sesión por falta de quórum. (Pág. 2602.)

261. Apéndice:

- I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2603.)
- II. Inserciones. (Pág. 2618.)

→ En Buenos Aires, a las 17 y 16 del jueves 1º de septiembre de 1994:

1

MODIFICACION DE LOS CODIGOS PENAL Y PROCESAL PENAL DE LA NACION

Sr. Presidente (Menem). — Continúa la sesión.

Corresponde proseguir con la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Derechos y Garantías en el mensaje y proyectos de ley del Poder Ejecutivo y del señor senador Alasino, por los que se modifican los códigos Penal y Procesal Penal de la Nación en lo que respecta a la prisión preventiva.

Sr. Alasino. — Señor presidente: el dictamen a que se ha hecho referencia contiene una modificación a los códigos Penal y Procesal Penal de la Nación en cuanto a acotar la duración de la prisión preventiva.

En realidad, de lo que se trata es de adaptar el instituto de la prisión preventiva al estricto cumplimiento de los derechos humanos, que a partir de la reforma de la Constitución tienen jerarquía constitucional. Por ello, si el tema en consideración se hubiera promovido antes de la reforma de la Ley Fundamental, quizás no habría tenido la envergadura actual.

Tal vez, señor presidente, este dictamen no hubiera sido necesario y, quizá, los jueces hubieran podido aplicar decididamente lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica.

Lo que ocurre, señor presidente, es que la extensión indebida de los procesos judiciales ha provocado que el instituto de la prisión preventiva haya ingresado en una crisis. Se estima que aproximadamente el 65 por ciento de los detenidos, en algunos casos, y en otros el 57 por ciento, según quien maneje las estadísticas, aunque de cualquier manera se trata de cifras sumamente elevadas —se trata de los detenidos en todos los establecimientos carcelarios del país— se encontrarían sufriendo prisión preventiva. Y digo sufriendo prisión preventiva porque, en realidad, para cumplir estrictamente con lo establecido en la Constitución Nacional en su artículo 18, la prisión debe tener ese carácter. Y no se trata de una tautología.

El artículo 18 determina con toda precisión que nadie puede ser penado sin juicio previo. La prisión preventiva ha constituido, sin duda, una

especie de prisión adelantada a la sentencia. Entonces, no solamente se ha desvirtuado el instituto de la prisión preventiva sino que, en mi opinión, se ha desobedecido, se ha transgredido el principio constitucional de inocencia.

Evidentemente, la prisión preventiva tiene su origen en la necesidad de que el detenido o aquel que debe soportar de alguna manera la labor de la Justicia, no se sustraiga a su acción. En esos casos, en función de la gravedad del delito y para atender los recaudos mencionados, es que el juez dicta con cierta regularidad la prisión preventiva. Pero insisto en que la prisión preventiva debería ser la excepción dada la raigambre constitucional del principio de inocencia a que hacía referencia al principio. Sin embargo, se ha transformado en la regla —contra todo lo esperado— debido a la disociación del mismo sistema, cuando en realidad debe ser la excepción.

Esto tiene relación, obviamente, con la duración de los procesos criminales. Con esto se intenta evitar demoras de cuatro, cinco, seis, siete y hasta ocho años, con lo cual se transgreden no ya principios constitucionales, sino derechos humanos, ya que toda persona tiene derecho a saber o a que se establezca con toda precisión cuál es su situación procesal. Si bien este principio no tiene raíz constitucional, no por ello deja de ser importante porque protege, de alguna manera, el derecho que tienen todos los habitantes de la Nación, todos los ciudadanos argentinos, de conocer con toda claridad cuál es la situación procesal en que se encuentran.

A ello hacía referencia Carrara cuando decía que la mejor sentencia es la que se pronuncia con mayor brevedad a la comisión del delito.

Frente a este sentimiento de indefensión que puede manifestar algún detenido por el exceso de la prisión preventiva, es bueno hacer notar que la libertad debe ser restringida exclusivamente por una sentencia. Además, la misma Corte Suprema de Justicia ha intentado atender estos dos intereses en pugna, en la tarea permanente de equilibrar los dos valores que están en juego: la libertad individual, por un lado, y el derecho de la comunidad —digamos— de mantener la seguridad del resto de sus habitantes, por el otro.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia en este sentido ha manifestado que la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, de forma tal que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del

otro. Este fallo de la Corte es similar a tantos otros que en el mismo sentido ha pronunciado el superior tribunal de la República, y puede confrontarse en Fallos 272.188.

En definitiva, el proyecto apunta a brindar operatividad al Pacto de San José de Costa Rica, cuando en el punto 5 del artículo 7º nos habla del derecho humano de toda persona o de todo individuo a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.

Esta disposición ha sido interpretada en numerosos fallos argentinos, y pacíficamente la mayoría de la jurisprudencia ha admitido que el plazo razonable al que se refiere el tratado internacional es de dos años.

El origen de la razonabilidad de este plazo de dos años debe buscarse en el antiguo Código de Procedimientos en lo Criminal, que establecía que la instrucción debía durar dos años, omisión que el actual Código tiene pero que no es atribuible al legislador sino a la misma mecánica que establece el nuevo procedimiento oral que instituye el actual Código Procesal Penal de la Nación.

Lo cierto, señor presidente, es que lo que esta modificación procura lograr es, como decía recién, un equilibrio entre el derecho humano a la libertad y la garantía de inocencia, por un lado, y la necesidad de la comunidad de defenderse contra el delito, por otro. La norma que se piensa introducir es el agregado de un párrafo al artículo 24 del Código Penal. El texto de este agregado es el siguiente: "Si por alguna circunstancia el procesado cumple dos años de detención sin que se le hubiere dictado sentencia, se computará a partir de este plazo, por cada día de prisión preventiva, dos (2) de prisión o reclusión."

Si bien ésta era la redacción originaria, se han tenido en cuenta algunas sugerencias que nos han hecho llegar y otros proyectos, de modo que vamos a corregir ciertas imprecisiones de la propuesta originaria introduciendo expresiones que con mayor exactitud contemplen la situación que se quiere atender.

El artículo 2º del dictamen procura agregar a continuación del artículo 315 del Código Procesal Penal de la Nación una norma mediante la cual se establece, a la usanza del viejo código, el plazo máximo de duración que debe tener la prisión preventiva, estableciéndose una prórroga al plazo de dos años; el juez a cargo de la instrucción podrá solicitar esta prórroga a su superior —en este caso, la Cámara Nacional de Casación

Penal— por un plazo de seis meses para continuar la investigación que había quedado inconclusa a los dos años. Se establece con precisión que una vez vencidos los dos años más los seis meses de prórroga, el juez debe resolver definitivamente sobre la situación procesal y proceder, en su caso, a decidir la inmediata libertad, sin perjuicio, obviamente, de las medidas cautelares que correspondan. También en este caso otros legisladores nos han hecho llegar sugerencias tendientes a corregir semánticamente la redacción del artículo en cuestión.

Finalmente, señor presidente, agregamos un inciso, el 6), al artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación, en el que se establece con precisión cuáles son las condiciones a cumplirse para que el juez de instrucción pueda conceder el beneficio de la excarcelación. Agregándole un inciso más contemplamos este plazo de dos años que tendrá el nuevo artículo 315 bis del Código Procesal Penal.

Finalmente, señor presidente, la intención del artículo 4º tal como está redactado en el dictamen —del que vamos a informar también algunas modificaciones propuestas por algunos señores legisladores— es dejar aclarado, con una mayor precisión, el principio del “in dubio pro reo” o de la ley más benigna, dado que algunos juzgados entienden que las cuestiones procesales no forman parte de este instituto.

Por eso propugnamos incorporarlo exactamente como un artículo más de este proyecto de ley, para que sea de aplicación obligatoria para todos los tribunales, tanto para los que han resuelto su aplicación a cuestiones procesales como para los que se han expedido en contrario.

En este aspecto, también debemos decir que la comisión ha recibido algunas propuestas de modificación vinculadas fundamentalmente al tema expreso de vigencia de la aplicación específica de la ley a las causas en trámite, que en mi opinión mejoran sustancialmente la posibilidad no solamente de aplicación de la ley sino también la prevención que los jueces de instrucción o los tribunales que estén a cargo del detenido podrán hacer en su momento, estableciendo a quiénes van a aplicar antes o con preferencia esta ley.

Finalmente, señor presidente, he de hacer notar que desde hace muchísimo tiempo los funcionarios competentes del Poder Ejecutivo vienen reclamando la sanción de esta ley que evidentemente no sólo va a intentar corregir la cuestión del exceso poblacional carcelario sino que además, es de estricta justicia. Y digo esto

porque el derecho que tiene toda persona a que de una vez por todas se establezca cuál es verdaderamente la situación procesal en la que se encuentra, si bien tal vez no tenga raigambre constitucional es evidentemente un derecho humano que nace de la necesidad que todo habitante tiene de saber con precisión a qué atenerse en cuanto a su libertad personal y a su situación con respecto al derecho que rige el Estado en donde vive.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitaremos en su momento la aprobación en general del dictamen contenido en el orden del día número 39, por el que se incorpora una norma al Código Penal y tres al Código Procesal Penal de la Nación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal, de la bancada de la Unión Cívica Radical.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente, señores senadores: examinamos una iniciativa importante pendiente desde hace tiempo en esta Cámara, que fuera remitida por el Poder Ejecutivo nacional con otras características y modificada en comisión.

Se trata de establecer una norma sobre la duración del encarcelamiento preventivo, de manera que no se convierta ni en un abuso ni en un exceso.

Esto está bien en teoría en cuanto se proclama el derecho humano a la sentencia. Voy a decir más: tanto constituye un abuso mantener en prisión preventiva a alguien sin resolver definitivamente su situación como el hecho de que esta persona se encuentre excarcelada o no privada de su libertad pero sometida a un proceso cuyo efecto, si bien permanece en libertad, recae sobre su nombre y su honor.

Esta es una desgraciada circunstancia que ocurre en nuestra administración de justicia: hay detenidos por un tiempo larguísimo y excesivo a los que no se dicta sentencia y hay personas procesadas sin detención a quienes tampoco se les resuelve la situación. Ante esto debemos preguntarnos si existe el derecho a la jurisdicción en la Argentina. ¿Existe la garantía del debido proceso cuando las causas no se resuelven, cuando los funcionarios de la justicia anuncian que las causas durarán largo tiempo y mientras tanto todos quedan sometidos a la condena implícita que significa la publicación en la prensa de la noticia? El tiempo va pasando y cuando se dicta una resolución, ya es tardía y el hecho quedó en el olvido.

Me parece que se está tomando la cuestión por un solo aspecto. Es claro que es el más grave porque afecta a los que se ven privados de su libertad, pero para resolver un problema real se está considerando un atajo teórico. Enunciamos que la prisión preventiva no puede durar más de dos años, tiempo que viene de la vieja norma del código nacional anterior que establecía que el proceso debía realizarse en ese tiempo, en base a lo cual se presentaban muchos pedidos de excarcelación cuando se había vencido, pedidos que reiteradamente los tribunales rechazaban. Sobre esta base se tomó la limitación del tiempo de la prisión preventiva, estimándolo en dos años. Esto es un exceso de cualquier manera porque es una barbaridad para un proceso penal con una persona detenida.

Digo que se toma un atajo teórico porque no se encara la realidad. La cuestión es saber por qué hay procesos que duran dos años o más con personas detenidas. Lo que hay que examinar a fondo es si se trata de algo razonable, si está justificada la conducta del juez o no al incurrir en semejantes demoras. Este es el verdadero problema.

Puede haber procesos complejos, en los que la demora esté justificada. Puede haber trabas procesales. Pero, ¿cómo se puede tener dos años detenida a una persona sin dictar sentencia? Queremos resolver esto con la afirmación teórica de que no puede durar dos años. En lugar de ver la causa, que es la mala administración de justicia, ordenamos la libertad automática como una suerte de renuncia a la potestad represiva del Estado sin siquiera saber qué alcances tendrán estas circunstancias, si resultará la libertad de un narcotraficante —como ocurrió en un tribunal de Bahía Blanca— o de alguien que hubiera cometido delitos excesivamente graves con riesgo para la sociedad. En lugar de pedir que se vacíen las cárceles, debe pedirse que haya más seguridad. No es cuestión de decir que hay que vaciar las cárceles, que están llenas porque son pocas, sino de limitar la delictuosidad. En lugar de tener más número de procesados que de condenados, la ecuación debe cambiar para que los procesos se inicien, se terminen y se dicte sentencia.

La situación que hoy se afronta se vincula con el viejo código escrito cuando las causas se demoran. El problema no se da ahora con el nuevo código procesal porque se dicta sentencia en los casos de detenidos, y ya sabemos el efecto residual casi inevitable de que las causas leves difícilmente llegan a juicio.

Según la información que he tratado de recoger —que no es estadística y oficial— en la actualidad hay aproximadamente seiscientas personas con causas iniciadas a través del proceso escrito que llevan más de dos años en prisión preventiva; en algunos casos, se encuentran en esa situación por un término de dos años y un mes y, en otros, de hasta ocho años.

¿Puede concebirse un sistema jurídico en el que haya personas que llevan ocho años en prisión preventiva y sin sentencia? ¿Podemos decir que la respuesta es simplemente fijar la automatización de la excarcelación, sin examinar las causas que han determinado semejante demora, que constituye la negación del sistema de justicia penal en nuestro país?

Por eso pienso que fallamos desde la base; que la solución es incompleta y teórica; que nos limitamos a apelar al anunciado de un derecho humano sin saber qué afecta ni a qué se refiere; sin saber que por el solo hecho de haberse producido la demora, quizá se ordena la libertad automática de alguien responsable de un delito gravísimo, perfectamente probado. Pero no sabemos por qué el proceso se ha demorado y si hay un juez responsable de la demora o no. Entonces, debemos ir más al fondo del problema.

Es cierto: el derecho comparado limita la prisión preventiva. Pero esto ocurre en sistemas que funcionan normalmente; esto es, donde las sentencias se dictan —al menos— cada tanto. En estos sistemas las leyes discriminan, incluso dentro de plazos más breves que los que nosotros consideramos: para los delitos graves, un plazo mayor; para los menos graves, un plazo menor. Diferencia las situaciones: cómo y por qué se ha producido la demora.

Frente a una situación de emergencia, sin conocer la realidad, es muy difícil legislar. Sobre nuestras bancas falta no la información estadística sino la concreta por parte del Poder Judicial acerca de qué ha pasado, por qué hay más de seiscientas personas que llevan más de dos años en prisión preventiva, sin sentencia, para saber de esa forma sobre qué legislamos, cuál es el efecto que producimos, quiénes son los que salen y por qué, y cuáles fueron las causas de la demora judicial en que se ha incurrido.

Comparto —no voy a discutir— el principio de inocencia: mientras no haya condena los acusados son inocentes. Entonces se tiene encarceladas, bajo sospecha, pero en estado jurídico de inocencia, a personas sin que se dicte sentencia.

También reconozco la excarcelación como un derecho constitucional, y la prisión preventiva

como una pura medida cautelar que no puede convertirse en pena, pero que en los hechos ya se ha transformado en tal cuando durante tanto tiempo se mantiene detenida a una persona.

Entonces, ¿cuál es la respuesta de la ley? Eliminemos todo, demos la libertad automática pero sin saber en qué casos, para quiénes, con qué efecto: si se trata de delincuentes peligrosos que van a fugar, si son autores de crímenes gravísimos, por lo que quién sabe si luego se los puede encontrar. Así, por el reconocimiento implícito de la ineficiencia judicial, soltamos a todo el mundo. Y esto será tomado por la sociedad al menos como un acto de ligereza.

Por eso debemos ver la otra cara del problema. Preguntarle al Poder Judicial qué ha pasado y qué pasa en la Justicia. Que nos informe con precisión las circunstancias, y si hay algún responsable que vaya —no hay juicio político en la Cámara de Diputados, porque se ha cambiado— al tribunal de enjuiciamiento para ver la razón de la demora. Este es un punto en el que el Congreso debe examinar a fondo los motivos por los cuales se ha producido esta situación.

Esto nos ha llevado a elaborar un proyecto distinto. . .

Sr. Molina. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: no soy un especialista en este tema, pero hace unas horas tuve oportunidad de escuchar al señor ministro de Justicia y en su exposición puntualizó que en la última década hemos acumulado unos doscientos mil juicios y que en materia de sentencias atrasadas en la Justicia federal estamos en el orden del millón.

Por eso hemos tratado de crear varios tipos de juzgados; en cada sesión tratamos designaciones de jueces.

Indudablemente, esto de la seguridad jurídica es un tema muy remanido: si no hay jueces ni edificios ni presupuesto, las causas se irán atrasando.

Como decía la vez pasada, el hecho de que un hombre esté detenido sin sentencia es uno de los delitos más graves que pueden cometerse, es decir, privarlo prima facie de la libertad sin tener acreditada prueba alguna de culpabilidad. En este sentido, coincido con el señor senador de la Rúa.

No cuento con los elementos centrales como para decir qué están haciendo los jueces. Al-

gunos se dedican al vedettismo mientras que los de otras cámaras en lo penal están actuando de manera excelente. En Mar del Plata, por ejemplo, cada tres días se dictan dos sentencias. Por ello me parece maravilloso el procedimiento oral. Pero convengamos que en el mundo, y esencialmente en nuestro país, la situación es muy compleja. Lo real y cierto es que tenemos una excesiva población carcelaria. Por lo tanto, habrá que fijarle un plazo a los jueces para dictar sentencia.

Concretamente, quienes alguna vez nos hemos dedicado al derecho penal debemos entender que no se puede tener detenida *sine die* a toda la población carcelaria que está sin sentencia.

Debemos preguntarnos si tenemos malos jueces o un mal sistema. A mi entender, salvo algunos casos que hemos condenado en este recinto, no existen causales evidentes de juicio político. Todavía hay algunos jueces que se consideran vedettes y que a diferencia de los viejos jueces, que hablaban a través de las sentencias, prefieren hacerlo por la televisión. De todas maneras, no creo que esto sea lo central.

Es posible que falte información. Advierto que el problema es serio y que la emergencia judicial no viene de ayer sino de hace varios años. Posiblemente el señor senador Alasino, que ha estudiado el tema, luego pueda dar mayores precisiones.

Quiere decir que ésta es una cuestión para reflexionar a efectos de darle una pronta respuesta. Pero debemos tener en cuenta que la solución no pasa por hacerle juicio político a todos los jueces con inmediatez.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Le agradezco la reflexión al señor senador por Santa Cruz, dado que es muy atinada e interesante. De todos modos, quiero aclarar que no estoy diciendo que se le deba hacer juicio político a todos los jueces sino que hay que ver el fondo del problema para saber por qué pasan ciertas cosas. Es posible que haya casos de irresponsabilidad y otros en los que no sea así.

Por otra parte, debo aclarar que despojo a este debate de todo sentido político. No estoy haciendo una imputación contra el gobierno ni creo que el bloque oficialista pretenda hacerlo contra el que presidimos nosotros. Simplemente se trata de un debate que nos debemos. Tal como lo planteé otras veces, falta una política criminal. A lo mejor debemos discutir el insti-

tuto mismo de la pena como sistema de reeducación criminal. Es evidente que hace falta una política carcelaria para tener cárceles distintas y no esas mazmorras que todavía subsisten. Debe haber cárceles más abiertas donde se reeduce y se brinde posibilidades de trabajo a quienes en ellas se encuentran. De esta forma, y con mejores medidas de prevención, se logrará un sistema mejor que permita afrontar el problema de la criminalidad, que es muy grave en su conjunto.

Es una ilusión creer que la cuestión se resolverá con la liberación de quienes llevan dos años de detención. Hay que ir más al fondo. Tiene razón el señor senador por Santa Cruz cuando dice que es un crimen tener detenida a una persona sin condena no ya más de dos años sino más de un mes.

La necesidad de tratar el proyecto que nos ocupa está denotando la crisis del sistema. Eso es lo que nos exige un debate más profundo y, más que eso, averiguar qué es lo que pasa. Ese es el déficit que tenemos. En este sentido asumo mi responsabilidad y hago la autocrítica. Tendríamos que ir a los tribunales y a las cárceles para ver qué pasa; conocer las cifras de la cantidad de detenidos y la situación en la que se encuentran. Así, a través de la ley estaríamos dando una parte de la solución, ya que no podemos darla en su totalidad porque una parte tiene que venir de los jueces y otra del gobierno, con la presentación de proyectos para que haya cárceles suficientes. Con esto no quiero decir que la cárcel sea la solución, sino que a mi entender ella está dada por la reeducación con un proceso más liberal y, sobre todo, con la adopción de medidas que eviten la reiteración del delito, que es el mal. Debe rescatarse al delincuente primario para que no recaiga en la delincuencia. No deben existir cárceles que se transformen en escuelas de dependencia, ya que quien sale de allí, en vez de hacerlo corregido sale peor, asociado con otros, y así la criminalidad aumenta. Por eso, como reconocemos esta realidad, hemos preparado un proyecto distinto que, sin negar la necesidad que existe, busca otro equilibrio teniendo en cuenta algunos modelos de legislación comparada, si bien no respecto de los tiempos pero sí en cuanto al esquema central.

En este sentido, el punto prioritario es ir a la causa de la demora y por eso decimos que deberán remitirse los antecedentes al órgano encargado del enjuiciamiento de los magistrados. En el Código Procesal Civil, donde sólo se tratan

intereses patrimoniales, hay una norma que fija el tiempo en que el juez debe dictar sentencia y establece que, cuando se venza el plazo, automáticamente los antecedentes deben ser remitidos al tribunal de enjuiciamiento de magistrados, de modo que el juez sepa que está controlado en el cumplimiento de su misión.

A mi entender, en materia penal tiene que suceder, por lo menos, lo mismo. Por eso el centro de nuestro proyecto en disidencia es que, cuando se opera el plazo máximo de prisión preventiva, deberá remitirse copia de las actuaciones al órgano competente para el enjuiciamiento de magistrados, de manera que haya alguien que controle si la Justicia está funcionando o no.

El juez tiene una gran responsabilidad y jerarquía. Es libre; no ficha tarjeta, pero tiene que dedicarle el tiempo necesario a su función. Es cierto que a veces las demoras son producidas por el exceso de causas o por falta de material, pero también es verdad que en algunas ocasiones se deben a la poca dedicación de los jueces. Esta realidad tenemos que mirarla y saber qué es lo que está sucediendo.

En estos días se ha producido un importante estudio sobre el funcionamiento de la Justicia que ya está abriendo la polémica acerca de cuáles son los tiempos reales para el funcionamiento de los tribunales. Como dije, a veces es cierto que faltan elementos; pero otras veces no faltan y, sin embargo, las causas quedan. Por un lado, hay jueces abrumados de trabajo y, lamentablemente, por otro lado hay algunos que dejan estar las cosas. Esta circunstancia es la que debería determinar las políticas en materia de creación de nuevos tribunales.

Evidentemente, estamos sosteniendo un importante debate que debería contar con la presencia del señor ministro de Justicia para comenzar a discutir esta problemática.

Lo cierto es que en nuestro proyecto hemos establecido que la prisión preventiva no excederá de dos años para los delitos que tienen penas previstas de hasta diez años de prisión. Pero cuando se trate de hechos penados con más de diez años —por ejemplo, homicidios, violaciones—, para evitar consecuencias no queridas, sostenemos que el plazo no podrá ser superior a los tres años, es decir que vamos un poco más allá. Es de suponer que si la persona está con prisión preventiva por esa clase de hechos graves es porque existe semiplena prueba o una probabilidad cierta acerca de su responsabilidad.

Por otra parte, excluimos los casos de las demoras artificialmente producidas. El proyecto que fue informado por el senador Alasino señala el plazo de dos años como máximo, en forma automática. Esto no prevé la situación de quien ha ido "cuerpeando" el asunto y demora la causa artificialmente. Es decir, si una persona está detenida por un homicidio, por narcotráfico o por un secuestro y estuvo dos años en prisión, sabe que después va a salir. En este caso, lo único que hizo falta fue lograr la demora del proceso, cualquiera fuese su causa.

En consecuencia, para evitar ese problema, introducimos en nuestra iniciativa la posibilidad de que no se computen las acciones meramente dilatorias. Es bien conocido el caso de un proceso que fue demorado a través de presentaciones sucesivas de distintos abogados que iban recusando al juez y, mediante tales recusaciones, nunca se llegaba a la sentencia. Así fueron pasando las cosas hasta que, en virtud de una de esas leyes que asumen ese tipo de situaciones, al acusado se le permitió la libertad.

También excluimos expresamente en nuestro proyecto la causa de fuga, considerando que tal conducta del imputado muestra su decisión de no someterse al proceso, de modo que la interrupción de dicho proceso se produce por un acto propio de esa persona.

Por otra parte, también debe quedar en claro que una vez que ha recaído sentencia condenatoria, aunque ésta no esté firme, ya significa que hay una decisión jurisdiccional de fondo, sería, que es más que la semiplena prueba aunque, reitero, la decisión no esté firme; de cualquier modo, ya hay una declaración de culpabilidad. En este caso no debe computarse el plazo; ya no se trata de un problema de injusticia sino que, en el trámite, se va avanzando. Como se trata de una norma nueva damos a los jueces un cierto plazo para ponerse al día. El proyecto del Poder Ejecutivo hablaba de un año y la comisión redujo el plazo a seis meses.

Esto ya lo vivimos en 1984. Cuando se modificaron las reglas de excarcelación se impuso esta cláusula de dos años, un plazo corto, y discutí el tema con el entonces senador Saadi.

Esto no es nuevo, ya que periódicamente tenemos que hacer cosas como ésta. Para vaciar las cárceles, habrá que reducir el plazo de dos años a uno y liberalizar la excarcelación como está liberalizada, por el solo hecho de que la condena condicional es hasta los tres años.

En una oportunidad —y esto ya lo he comentado— el ministro Arslanián o, mejor dicho, el

presidente de la República con la firma de Arslanián, me envió un proyecto por el que se modificaba este artículo y se llevaba la condena condicional a dos años. Lo explicó en televisión, dando una gran respuesta a la sociedad, que demandaba seguridad, y habló de los detenidos que entran por una puerta y salen por la otra diciendo que eso no iba a ocurrir más, ya que el exceso había provenido de la reforma de la condena condicional.

Pasó el tiempo y, en una ocasión, pregunté al ministro por qué la mayoría oficialista no impulsaba ese proyecto. Me contestó que no se podía porque no había dónde ubicar a los detenidos. Se trata de la confesión de la crisis del sistema o del grave problema de la delictuosidad que tenemos.

Con los plazos que damos en nuestro proyecto discriminamos las distintas situaciones; para los casos en que la prisión preventiva no supere los dos años, otorgamos un año para que se resuelva. Si el tiempo de prisión preventiva va de dos a tres años, damos diez meses; si es mayor de tres y hasta cuatro años, damos ocho meses. Y para todos los casos en que se exceda de cuatro años, hablamos de seis meses, es decir, de un tiempo más corto. Se trata de que no se produzca un efecto indiscriminado y no sepamos a dónde va a conducir esa situación.

Reconozco que, en gran medida, esto está determinado porque no tenemos los elementos materiales como para saber cuál es el efecto concreto que producirá la decisión que vamos a adoptar. Es más, esta libertad que se va a otorgar no pierde su naturaleza de excarcelación. En el proyecto es una libertad automática, mientras que en nuestro caso se trata de una excarcelación. Y hay una diferencia: la libertad automática es un derecho pleno; en cambio, la excarcelación es una libertad caucionada sometida a ciertas reglas que deben observarse y que, si se violan, pueden ocasionar la revocación. Además, el juez siempre conserva la facultad de negarla para casos de extrema peligrosidad del sujeto o para cuando tenga indicios de que puede fugarse o cometer otro delito. Es decir, se otorga el instrumento, pero se hace más razonable y no tan extremadamente peligroso.

Por eso no estamos de acuerdo en que se modifique el Código Penal. Advierto que se habla del caso de que el procesado cumpliera el plazo sin que se le hubiera dictado sentencia, y acá no se sabe si es sentencia firme o sentencia que puede ser la de primera instancia con apelación posterior.

Creemos que no debe tocarse el Código Penal para resolver una situación del Código Procesal Nacional, porque aquél rige para toda la Nación, y aquí estamos resolviendo sobre la legislación procesal de la Capital Federal.

Por estas razones, llegamos al proyecto que hemos dado a conocer los senadores. Aprecio la iniciativa y el esfuerzo de la comisión que preside el señor senador Alasino, pero decimos que ésta es nuestra posición sensata, mucho más restrictiva, pero que quiere ser racional frente a las circunstancias sobre las que nos toca legislar. Creo que si la mayoría aprueba esa otra iniciativa, estará legislando a ciegas, enunciará un derecho humano incuestionable pero sin conocer el efecto inmediato de acuerdo con la realidad objetiva sobre la que se legisla. Y lo que es peor, a mi juicio, es que se da la respuesta desde el punto de vista de la teoría en lugar de hacerlo teniendo en cuenta la realidad o la práctica.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: han sido muy interesantes e ilustradas las exposiciones que acabamos de escuchar con relación al tema planteado en los proyectos de ley. Digo esto porque a la iniciativa que estamos considerando debemos sumarle otra que ha sido recientemente presentada, que también deberá ser materia de debate.

A fuer de la honradez intelectual debo expresar que de ambas exposiciones extraigo nociones con las que concuerdo absolutamente, lo que también implica decir que en ambas exposiciones encuentro aspectos con los que no coincido. Y lo hago sin pretensión alguna, sino simplemente desde la perspectiva forzosamente distinta de una experiencia diversa sobre temas que hacen al desarrollo del proceso penal.

En mi provincia — la de Catamarca — tenemos instaurado desde 1960 el juicio oral de instancia única, que es prácticamente el mismo modelo que rige en la Capital Federal para la jurisdicción nacional. Al respecto, debo señalar que en la provincia no se ha producido ninguna excepción, según creo, y entiendo que tampoco vamos a tener el problema al que trata de responder este proyecto de ley, pues el mecanismo y la dialéctica — o mejor dicho — la praxis propia del proceso penal lleva a que se realicen los debates de los juicios orales respectivos en los casos de delitos en que no hay excarcelación, y salvo algún caso muy excepcional, antes de transcurrido el año ya está dictada la sentencia, de ma-

nera que el imputado tiene perfectamente aclarada su situación frente a la ley.

No con ánimo de reivindicar una primicia sino por estricto ajuste a la verdad histórica, debo decir que ya en 1961, en mi provincia y con motivo de una norma que vedaba absolutamente la excarcelación del imputado con respecto a ciertos delitos planteamos — uso la primera persona del plural porque en aquella época ejercía como fiscal de instrucción en lo Penal — la inconstitucionalidad de una norma que vedaba absolutamente la libertad del imputado y obtuvimos la condigna declaración de inconstitucionalidad mediante un fallo que, sometido a revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue convalidado por el más alto tribunal de la Nación.

En 1968, vale decir hace exactamente veintiséis años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Matei resolvió que dentro de la hermenéutica del artículo 18 de la Constitución Nacional se encuentran la idea y la garantía de que el imputado tiene derecho a obtener una sentencia definitiva en un plazo razonable.

Se dijo en aquel fallo — seguido por decenas de otros fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación — que ésa es una aplicación del principio del debido proceso legal o de la razonabilidad, según la doctrina que ya en 1940 supo desarrollar Juan Francisco Linares cuando escribió un célebre opúsculo intitulado "La razonabilidad como garantía innominada de la Constitución".

De modo que no es por antipatía a las novedades sino porque me parece que nuestra vieja Constitución, reformada últimamente, tiene todavía un rico venero que valorar y aplicar. Y disintiendo en parte con quien ha expresado el criterio de la mayoría, diría que no hay necesidad de acudir al tema de los derechos humanos ni tampoco a la previsión del Pacto de San José de Costa Rica para entender como plenamente congruente con el artículo 18 vigente — que no ha sido reformado, gracias a Dios — este propósito de establecer un plazo de dos años como límite razonable de una prisión preventiva.

He escuchado con sumo interés la exposición que ha hecho el señor senador por la Capital, cuya autoridad no necesita ponderación expresa en este cuerpo. Alguna vez tuve el honor de presentarlo en mi provincia para una conferencia en el Colegio de Abogados, y algunas de sus obras son de lectura imprescindible para todo aquel que cultive la disciplina del derecho procesal penal; por ejemplo, su obra sobre recurso de casación. Pero más allá de este respeto intelectual

que me merece el señor senador, discrepo con algunas de sus apreciaciones, porque me parece que subordinan la duración de la prisión preventiva a la gravedad de la pena prevista para el delito. Esto es, de alguna manera, rendir tributo a una noción que me parece errónea, a saber, el considerar la prisión preventiva como una suerte de anticipo de la pena. Por otra parte, entiendo que la gravedad en abstracto de la pena conminada para el supuesto delito no necesariamente tiene relación con la complejidad o la duración del proceso. Forma parte de la experiencia cotidiana de quienes practican el derecho penal el enfrentarse con delitos graves —por ejemplo, un homicidio calificado con el vínculo— cuya investigación y desarrollo procesal no son complejos ni exigen gran extensión en el tiempo. En cambio, otros delitos menos graves, como alguna defraudación de las que se pueden cometer mediante los modernos métodos de la ingeniería financiera, sí exigen un desarrollo procesal complejo y mucho tiempo.

También discrepo en la utilización del concepto de peligrosidad, que no me parece congruente con ciertos principios aceptados de nuestro derecho penal, que no es un derecho de autor sino de actos. La peligrosidad está mentada cuando se habla de la mensuración de la pena, pero de un modo que no da lugar a que se discrimine entre castigos según lo que una persona es sino según lo que una persona ha hecho o dejado de hacer ilícitamente.

Propongo terciar en esta cuestión. Creo que el proyecto de ley apunta a una situación de transición. Lo que se está viviendo en la Capital Federal es el problema de la transición desde el juicio escrito, con su plétora de asuntos sin resolver, al juicio oral, que va a permitir una premura congruente con el respeto por las garantías constitucionales. Se me ocurre que en una situación de transición razones de prudencia aconsejan no descartar los instrumentos con los que ya contamos dentro de la dogmática procesal penal para resolver este conflicto de valores que se plantea, tan bien expuesto por los dos señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Y la manera de no prescindir de los elementos que tenemos sería, en mi criterio, simplemente disponer la libertad automática de quien haya cumplido los dos años de prisión preventiva, sin situar esa hipótesis como un supuesto más del derecho del imputado o procesado a la excarcelación. De este modo, el juez conservaría la potestad que actualmente le confieren los artículos 317 y 319 del Código Procesal Penal, que autorizan al juez a merituar una serie

de circunstancias que tienen en cuenta no sólo la concreción de una adecuada administración de justicia sino también razones de seguridad pública, a los efectos de valorar si procede la excarcelación.

Me parece que sería el modo más adecuado de responder al derecho que tiene todo individuo de obtener la sentencia o la libertad, en caso contrario, tras dos años de haber estado en prisión preventiva que, de por sí, es una medida cautelar excepcional. Además, tiende a evitar la situación que ha señalado el señor senador por la Capital, quien ha marcado lo peligroso que significaría la liberación automática de todos los procesados que actualmente se encuentran en prisión preventiva, simplemente porque hayan transcurrido dos años bajo esa calidad.

Este es el motivo de las parciales coincidencias y disidencias que vengo anunciando y que espero fundar adecuadamente cuando se produzca el tratamiento en particular de este proyecto.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Este es un tema que hace bastante tiempo que se encuentra a nuestra consideración, bastante complicado y difícil debido a que hace a la libertad de las personas.

He realizado un profundo y especializado análisis de esta cuestión, pero para no reiterar los conceptos vertidos y para acelerar el desarrollo de esta sesión dado que tenemos muchos temas para tratar, voy a solicitar la inserción del estudio al que he hecho referencia en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Menem). — Oportunamente se someterá a votación el pedido de inserción solicitado por el señor senador por Corrientes.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Me referiré muy brevemente a este tema, señor presidente, porque parecería una irreverencia hacer un análisis técnico luego de las exposiciones que hemos escuchado tanto desde el punto de vista penal como procesal penal.

Quiero dejar sentada la posición de nuestro bloque, que se basa en sostener el proyecto presentado por el señor senador Fernando de la Rúa, que fue suscripto además por casi la totalidad de los integrantes de nuestra bancada.

Quiero recordarles al señor presidente y a los señores senadores que cada vez que este tema iba a tratarse, el bloque radical solicitaba un

mayor análisis del tema en la búsqueda de un mayor consenso con el bloque justicialista procurando la flexibilización de la posición contenida en el dictamen de mayoría. Por otra parte, en varias oportunidades solicitamos infructuosamente al mismo bloque la remisión del proyecto a comisión a efectos de recabar la información de cuántos procesados se verían beneficiados con la sanción de este proyecto de ley.

Quiero señalar simplemente, señor presidente, que el artículo 1° del proyecto elaborado por el señor senador por la Capital, Fernando de la Rúa, y suscripto por casi todos los integrantes del bloque al que represento, hace una distinción en cuanto a la duración de la prisión preventiva de dos o tres años, según se trata de delitos cuya pena exceda los diez años o no. Esto ha merecido algunos reparos de parte de varios señores senadores.

Quiero señalar que esta norma está basada en la legislación italiana actualmente vigente que recepta el Pacto de San José de Costa Rica, aplicando el criterio de la duración razonable de la prisión preventiva. Pero establece una escala de su duración en función de la pena prevista para cada delito. De tal modo, como lo señalan los fundamentos de este proyecto, esta categorización está fundada en ese antecedente valioso del derecho comparado, concretamente de la legislación italiana.

En el caso de la española existe otro criterio, que es el de establecer otras normas procesales que flexibilizan el proceso a través de un número muy importante de causas en las cuales el fiscal puede solicitar prórrogas al plazo de dos años de la prisión preventiva.

Tenemos sobre nuestras bancas la redacción definitiva del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y advertimos que son mínimas, por no decir casi nulas, las modificaciones que se han incorporado al despacho, por lo cual debemos expresar que, lamentablemente, el trabajo realizado por el señor senador de la Rúa y nuestro bloque para elaborar este proyecto no ha determinado ninguna modificación sustancial sobre el despacho que se someterá a votación.

Es inexcusable, por ejemplo, que se rechacen aspectos como los que voy a detallar. En primer lugar, una cuestión que está muy bien desarrollada en el proyecto presentado por mi bloque: suspender el plazo del artículo 315 cuando se trate de procedimientos dilatorios que pueda aplicar la defensa. A mi juicio esto es incontestable, como decía el señor senador por la Ca-

pital. De sancionarse la ley tal cual reza el dictamen de mayoría, para los procesos pendientes se consagrará un mecanismo muy eficaz para la defensa, que es dilatar el proceso hasta el cumplimiento de los plazos, porque esto determinará la libertad del imputado.

También es grave, como bien lo señalara el señor senador de la Rúa, que se siga hablando de libertad del detenido y no de excarcelación, como técnicamente correspondería hacerlo. De tal modo que sugiero al bloque de la mayoría que reconsidere este tema, a efectos de darle mayor coherencia a su redacción. Igualmente, que se suspenda el curso del cómputo del plazo como establece el artículo 315 para el caso de la fuga del imputado. Por otra parte, que se suspenda la situación especial de algunos procesos de alta complejidad probatoria.

Quiero referirme a este tipo de procesos. Un ejemplo es cuando hay tres o cuatro decenas de imputados, por lo que los procesos se ven muchas veces detenidos dado que hay que producir prueba en el exterior. Otro caso es cuando deben realizarse pericias de alta complejidad contable, como ha ocurrido en delitos económicos que han demorado seis o siete meses. También cuando hay imputados que deben ser objeto de extradición de países extranjeros. En estos casos, la recepción de la prueba puede llegar a insumir gran cantidad de tiempo.

Ninguno de estos supuestos está previsto en el proyecto del bloque justicialista, de modo tal que la sugerencia que formulamos es que, al menos, incorporemos estos elementos que morigeran el efecto que tendrá el proyecto aprobado de acuerdo con el despacho de la mayoría, con la redacción final que figura en las fotocopias que se nos han acercado hace instantes.

Así remitiéndonos en un todo a las expresiones del señor senador por la Capital de nuestro bloque, la Unión Cívica Radical sostendrá íntegramente el texto del proyecto que en su oportunidad presentara, lamentando que el bloque justicialista no haya acogido muchas de las modificaciones que hubiesen perfeccionado el texto de la iniciativa que nació en el Poder Ejecutivo y que fue modificada en el Senado.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente, quiero hacer una precisión adicional a mi querido amigo y respetado senador por Catamarca, quien hace una observación respecto de la posibilidad de que el juez niegue esta excarcelación si hay elementos para suponer que el imputado incurrirá

en un nuevo delito. Decía que esto vulneraría el criterio de un derecho penal de acto y no de delincuente. Además, es un imputado que está en período de inocencia.

Sin embargo, esta cláusula ya existía en el Código Penal redactado por Soler y Vélez Mariconde, porque se refiere a esos casos en que el juez tiene indicios vehementes o elementos suficientes con respecto al peligro de que el sujeto seguirá delinquiendo. Entonces, aunque formalmente pueda corresponder la excarcelación, existe un peligro a la vista. Es como el caso de aquel que ha anunciado su venganza, motivo por el cual se sabe que si es puesto en libertad, matará a alguien. En consecuencia, considero que hay que dejar en manos del juez la apreciación de estos hechos —aunque pueda parecer arbitrario— porque es la parte en la que la ley debe confiar en los magistrados.

La otra cuestión se refiere a la distinción que hacemos en base a la gravedad del delito. Por cierto, es tan injusta la detención prolongada en prisión preventiva como consecuencia de un delito leve como si se trata de uno grave. Al respecto, el *Tratado de derecho procesal italiano*, de Giovanni Leone, explica que en el sistema de ese país la perención del arresto varía según la especie de instrucción y la gravedad del delito. Se apela a esto porque no hay otra forma. Es cierto; puede ser más simple la prueba de un homicidio que la de un hurto o una defraudación, pero se tiene en cuenta la mayor entidad del riesgo como un criterio de valoración objetivo.

Otro aspecto que no hemos recogido en nuestro proyecto —admito la omisión— pero que contempla la legislación italiana, es el hecho de que la limitación de la detención se da sólo para la fase instructora. Cuando ya se ha pasado la etapa del juicio y existe sentencia condenatoria, corresponde la limitación de la detención. En realidad, se trata de un aspecto que en cierto modo sí incluimos en nuestra iniciativa al decir de dos años; en este caso, ya entramos en el juicio. Para el proceso escrito, fijamos que se haya dictado sentencia condenatoria, aunque sea de primera instancia y no esté firme.

Son aclaraciones que quería realizar a efectos de completar mi exposición inicial.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para hacer algunas consideraciones.

Ante todo, debo decir que comparto íntegramente las apreciaciones realizadas por el señor

senador por Catamarca y que, a mérito de cómo ha quedado redactado finalmente el dictamen de la comisión, no dudo de su apoyo al proyecto.

Digo esto porque las modificaciones que hemos contemplado del proyecto del senador de la Rúa y del bloque radical en el fondo apuntan, precisamente, a establecerlas como una posibilidad más de excarcelación, tratando de equilibrar los intereses en pugna entre la libertad individual y el derecho a la seguridad común que tiene la sociedad.

Pero quiero referirme al proyecto de la minoría. Yo también comparto la apreciación en el sentido de que me parece sumamente peligrosa esta distinción en diversas categorías de delitos. Porque lo que está en juego, señor presidente —bien lo dijo, aunque lo ha soslayado, el señor senador por la Capital— es una cuestión de fondo, relativa a lo que debemos proteger antes que nada en las cuestiones procedimentales. No se trata de la calidad del delito sino de la calidad del principio que se quiere proteger.

Si establecemos el mecanismo que propone el proyecto de la mayoría, el principio de inocencia, bajo delitos graves caería, porque la prisión preventiva se convertiría en sentencia definitiva. Esto descalifica absolutamente la intención de establecer categorías de delitos para tratarlos según la envergadura de su gravedad porque, apurando el razonamiento, terminaremos diciendo que los delitos más graves, en última instancia, son de prisión inmediata, con lo cual caería automáticamente el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece el principio de inocencia. Por eso aquí no se trata de la mayor o menor cantidad de días de condena sino de una cuestión cualitativa, razón por la cual debe primar la protección del derecho de fondo, que —reitero— es el principio de inocencia. Por ello consideramos que la mecánica adoptada en el dictamen de minoría vulnera expresamente el principio constitucional de la inocencia.

Tampoco nos parece oportuna —en primer lugar haré referencia a los puntos del dictamen de minoría con los que no estamos de acuerdo y luego a los que hemos incorporado al dictamen de mayoría, con lo cual ha sido mejorado— esta especie de vista fiscal que se establece para hacer lugar al pedido o no porque si bien tenemos en claro, sobre todo a partir de la reforma de la Constitución, que el ministerio fiscal es el titular de la acción pública, evidentemente lo que se trata con la prórroga es que el juez pueda pedir al superior una ampliación del plazo para finiquitar una investigación que no ha podido concluir en el lapso establecido por la ley.

Distinto sería si lo que se quisiera hacer fuese promover la libertad o establecer alguna medida que cambiara la situación procesal del detenido. Pero no se trata de eso sino simplemente de ampliar un plazo que tal vez pueda resultar breve para la actividad investigativa de algún delito específico por parte del juez de instrucción. Entonces, nos parece que no tiene sentido la cuestión referida a la vista fiscal a la que se refiere el artículo 1º del dictamen de minoría.

Por otra parte, no podemos echarle la culpa al reo del mal abogado. Es cierto que sobre el particular existen opiniones divididas incluso entre aquellos profesores que podemos considerar están a la vanguardia del derecho penal progresista o penal. A la comisión le ha parecido insostenible que una persona pague con su libertad la actividad dilatoria de un mal abogado. No podemos conculcar el derecho de defensa, que lo puede ejercer material o personalmente el imputado o técnicamente el abogado, y hacer caer en la persona del detenido la actividad de una defensa que está imposibilitado de atenderlo.

Entonces, no podemos quitarle al juez el beneficio que le estamos dando, referido a la ampliación del plazo para dictar sentencia, por el hecho de que un abogado sea especialista en chicanas. Por más que se quiera atender el requerimiento de la seguridad por parte de la comunidad, cualitativamente se trata de dos cosas distintas.

Bajo ningún concepto podemos admitir que las acciones procesales que lleve a cabo un abogado, que el juez puede calificar de dilatorias o no, terminen perjudicando a la persona detenida e interrumpiendo arbitrariamente el plazo mediante el cual se debe tener resuelta la situación procesal.

Tampoco nos parece que no deba aplicarse el trámite con el tema de la fuga, porque está resuelto en el Código actual.

Los artículos 288 y siguientes entablecen con toda precisión que la rebeldía se decreta cuando la persona se fuga. Entonces automáticamente, la rebeldía zanja la cuestión y el efecto inmediato es que el plazo no se cuenta.

En consecuencia, no hace falta hablar de la fuga en este proyecto de ley porque en el Código actual ya está establecido claramente lo que sucede cuando el detenido se fuga.

Nos parece que tampoco es necesario...

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Alasino. — Sí, como no.

Sr. Presidente (Menem). — tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Voy a ser muy breve. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor senador respecto de la fuga, pero lo que hay que establecer es que los plazos no se acumulan. Es decir, el tiempo que estuvo detenido antes de la fuga y el que está después no se suman. Si el detenido se fugó, la cuenta empieza de nuevo. Esto es lo que decimos nosotros y el senador no dice.

Sr. Alasino. — El instituto de la rebeldía, entre las consecuencias que trae aparejadas, brinda un elemento que es el que va a determinar el beneficio que puede llegar a tener el imputado, teniendo en cuenta si el plazo de la instrucción dura dos años o dos años y seis meses.

El juez tiene un amplio espectro, a partir de la rebeldía del detenido, para decidir la situación. No creo que esta cuestión haya que establecerla en este proyecto dado que el mismo Código de Procedimientos, en mi opinión, resuelve esta situación a través de la figura de la rebeldía, que nosotros de ninguna manera modificamos.

Por otra parte, el dictamen de mayoría si bien no adolece de falencias sí puede establecer que los seis meses de prórroga pueden obligar a una cadena de resoluciones de los jueces respecto de todos aquellos detenidos que estén con el plazo próximo a vencerse o con el plazo de los dos años ya vencido. Esta situación podría haber traído una enorme acumulación de causas que el juez no hubiera podido resolver.

Por ello, hemos acogido lo que para mí ha sido un buen aporte del dictamen de minoría, pero hemos mantenido la distinción natural que nosotros hacemos, respecto de si son más o menos de dos años. Insistimos en que se trata de una cuestión cualitativa y no podemos, por la vía de reprimir los delitos graves, sancionarlos anticipadamente, estableciendo que la prisión preventiva es definitiva para quien ha cometido ese tipo de hechos de suma gravedad.

Esto que para nosotros es de fondo nos ha impedido admitir la distinción entre la gravedad de distintos delitos según fuese la pena. Por eso mantuvimos los dos años como límite, pero pretendemos establecer que los plazos para resolver esta situación van a ser de un año cuando la prisión preventiva sea menor de dos años, y de seis meses cuando sea mayor de dos años.

Lo que estamos intentando es de alguna manera obligar al juez a que decida cualitativamente qué causa va a atacar primero para su resolución.

Quiero concluir refiriéndome a la cuestión disciplinaria vinculada con el mal desempeño del juez. Esta cuestión también ya está tratada, por lo que no hace falta incluirla en este proyecto. En efecto, está la ley 24.050 que establece con precisión cuáles son las facultades de superintendencia en la justicia argentina. La Cámara de Casación tiene la superintendencia en la superintendencia de los inferiores y cuando advierte retardo de justicia o mal desempeño, automáticamente debe adoptar las medidas del caso.

Con la nueva Constitución, estas situaciones se derivarán hacia el Consejo de la Magistratura. Actualmente, ya existe la facultad de corregir al juez que indebidamente se retarde en la administración de justicia. Por eso nos parece que no es necesario incluir esta cuestión en este proyecto porque, reitero, ya contamos con la ley 24.050 y con su decreto reglamentario, que es el 2.768/91.

Debo decir que el despacho de la minoría, como las observaciones del señor senador por Catamarca, nos han hecho ser mucho más precisos en la redacción de nuestro dictamen y hemos ensayado uno nuevo, respecto del cual si bien nos extenderemos durante la consideración en particular, adelantará algunos puntos.

En el dictamen original, que en su artículo 1º agregaba un segundo párrafo al artículo 24 del Código Penal, hemos erradicado la palabra "detención" que evidentemente, es ajena a los tipos de sanción que tiene la ley penal, y hemos mantenido exclusivamente la terminología referida a prisión.

El Código Procesal Penal habla de prisión y, por lo tanto, nos parece aconsejable admitir la observaciones formuladas por la minoría y dar coherencia a los términos a utilizar.

En el artículo 315 a que se refiere el artículo 2º hemos eliminado "en ningún caso", con lo cual estamos dando a este instituto la posibilidad de que sea utilizada la vía de la excarcelación y que, además, en situaciones especiales, el juez pueda denegarla cuando las circunstancias que rodeen el delito o la personalidad del delincuente lo tornen necesario. Entonces, introducimos la vía de la excarcelación para que el juez tenga una atribución más en el caso de que fenezan los plazos establecidos por esta norma, a partir de su inclusión en el Código de Procedimientos en Materia Penal.

En el artículo 3º también hemos dado precisión a la terminología. Asimismo, en el artículo 4º hemos incorporado aquello a lo que yo aludía

cuando decía que, en mi opinión, era tal vez el punto más atacable de este proyecto de ley; me refiero a la forma en que los jueces deberían abordar la situación de quienes al momento de entrar en vigencia esta ley estuvieran bajo el instituto de la prisión preventiva. Ahí sí hemos establecido la diferencia entre un año o seis meses, según que el tiempo de prisión preventiva sea menor o mayor de dos años.

Finalmente, mantenemos como segundo párrafo el actual artículo 4º del dictamen, en donde tenía razón de ser aquello que indicamos en el sentido de que algunos tribunales no aplicaban, o habían resuelto hacerlo, la ley más benigna a las cuestiones procesales.

Con estas salvedades, aprobaremos el dictamen de la mayoría con las modificaciones en particular, que haremos llegar por escrito a la Secretaría para que sea leído el dictamen tal como en definitiva la comisión estima que debe quedar redactado.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Señor presidente: solicito que sean insertados en el Diario de Sesiones algunos conceptos que tenía preparados.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración las inserciones solicitadas por los señores senadores por Corrientes y por Jujuy, a menos que haya algún otro pedido de inserción.

Sr. Villarroel. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: solicito la inserción en el Diario de Sesiones de unas breves notas.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.

— La votación resulta afirmativa.¹

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en particular.

Se dará lectura de cada artículo, con la redacción correspondiente.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Artículo 1º — "Agréase como segundo párrafo del artículo 24 del Código Penal de la Nación, el

¹ Ver el Apéndice.

siguiente: "Si por alguna circunstancia el procesado cumpliera dos años de prisión sin que se le hubiere dictado sentencia, se computará a partir de este plazo, por cada día de prisión preventiva, dos (2) de prisión o reclusión".

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Si bien estoy de acuerdo con el contenido sustancial de la norma, sugeriría la supresión de la expresión "Si por alguna circunstancia...", porque se trata de una frase obvia. Desde luego, si pasaron más de dos años, será por la existencia de alguna circunstancia.

Sr. Presidente (Menem). — Entonces comentaría: "Si el procesado cumpliera...".

Sr. Alasino. — Está bien.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: en la consideración en particular nos remitiremos a las objeciones formuladas en las exposiciones en general, de tal modo que éstas deberán tomarse en cuenta cuando se considere cada uno de los artículos.

Reitero además que sostenemos el proyecto que elaboró el senador por la Capital y que fue acompañado por el resto del bloque.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 1° con la modificación propuesta.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 2°.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Artículo 2°: "Agréase a continuación del artículo 315 del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente: Artículo 315 bis: La prisión preventiva del procesado no excederá de dos (2) años; sin embargo el tribunal competente, mediante requerimiento fundado, podrá solicitar por única vez a la Cámara Nacional de Casación Penal, la que en un plazo no mayor de diez (10) días deberá expedirse, una prórroga que no podrá ser superior de seis (6) meses. Una vez vencida la prórroga el tribunal deberá resolver definitivamente la situación procesal y proceder a su inmediata libertad, sin perjuicio de otras medidas cautelares que correspondan".

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopce. — El artículo debe titularse "Duración", tal como figuraba en el dictamen, circunstancia que se ha omitido en esta redacción.

Además, luego de la expresión "dos (2) años" debe haber un punto y no un punto y coma.

Sr. Presidente (Menem). — ¿La comisión acepta la modificación?

Sr. Alasino. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: recogiendo en esto parte de las ideas expuestas en el proyecto de ley presentado por el señor senador por la Capital, sugeriría respecto de esta misma norma una redacción distinta.

En efecto, el artículo 315 bis se titularía "Duración" y su redacción sería la siguiente: "Salvo el lapso mayor derivado de la interposición por el procesado de recursos de carácter extraordinario contra sentencia definitiva, la prisión preventiva no excederá de dos (2) años".

Explico el porqué de este primer párrafo. Con ello se intenta dejar absolutamente en claro la situación que se produce si hay una sentencia condenatoria, naturalmente —porque si fuere absolutoria el detenido tendría que salir en libertad—, contra la cual se interponen recursos extraordinarios, sean los locales o federales, de casación, etcétera.

Luego está el tema de la norma sobre prórroga. Al respecto propongo el siguiente texto: "La Cámara Nacional de Casación Penal, mediante requerimiento fundado del juez o tribunal respectivo, podrá sin embargo disponer una prórroga de ese término hasta por un (1) años, que se contará desde el vencimiento del término anterior". O sea, desde que vencieron los dos años.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Alasino. — No vamos a aceptar la sugerencia del señor senador por Catamarca, porque nos parece mejor empezar legislando por la regla y no por la excepción. Planteado como lo hace el señor senador, empezaríamos poniendo como excepción lo que no queremos que sea excepción sino la regla. Esta es la intención que está detrás de la incorporación de esta norma.

Además, hay una aclaración que en su momento omití, pero que tiene que ver con este tema. No interesa de qué sentencia se trata; no interesa si está firme o no. A partir de la sentencia, vale la regla del dos por uno. Esto es así por imperio de la ley de fondo, porque se ha excedido el plazo en el cual uno cree que razonablemente debe resolverse la situación procesal. Entonces, el efecto que tiene la sentencia, esté

firme o no, es que, si se ha excedido el plazo de dos años, se computa por cada día de prisión preventiva dos de prisión o reclusión. Este es el efecto automático de la sentencia en el cómputo de la pena del detenido.

Distinta es la situación penal tal como está reglamentada en el código procesal vigente. Nos parece, insisto, que la redacción que hemos adoptado es mucho más oportuna, pues empieza por establecer la regla, el principio general, y termina estableciendo la excepción, y no al revés.

Vamos a admitir, por lo tanto, la propuesta del señor senador por Jujuy, en el sentido de poner un punto después de “dos (2) años” y continuar con mayúscula. No vamos a acceder al pedido del señor senador por Catamarca.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 2º, con las modificaciones aceptadas.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 3º.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee) “Art. 3º. — Agrégase como inciso 6 del artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) el siguiente: ‘6. Cuando el imputado hubiere cumplido dos (2) años de prisión preventiva.’”

Sr. Villarroel. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: puedo presumir que no va a ser aceptada la propuesta que he hecho llegar, pero de todos modos quiero decir algo. La diferencia fundamental con respecto a la norma anterior se relaciona con la inmediata libertad, en cuanto se otorga al juez potestad para decidir en cada caso si el mero vencimiento de aquel plazo conduce a la libertad. Me voy a permitir leer el artículo 319 del Código Procesal Penal vigente, en la parte que sigue a la enumeración de los casos de excarcelación: “Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación respetándose el principio de inocencia y el artículo 2º de este Código cuando la objetiva y profesional valoración de las características del hecho, la posibilidad de declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieran presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. La modificación propuesta tendía a recortar la potestad del juez y evitar que los jueces se vieran

constreñidos a ordenar libertades escandalosas para la opinión pública.

El caso del artículo 3º es consecuente con la inserción que vengo solicitando, ya que mi propuesta es agregar como inciso 6º del artículo 317 el siguiente supuesto de excarcelación: “Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva el término previsto en el artículo 315 ‘bis’ y el de prórroga, si ésta se hubiese otorgado en orden al mismo artículo”. En efecto, está además la posibilidad de prorrogar que estaba reconocida en la norma anterior.

Sr. Alasino. — Vamos a mantener la redacción, señor presidente.

De todas maneras, quiero dejar aclarado que mantenemos el artículo anterior, el de inmediata libertad, pero al haberle sacado la expresión que contenía el dictamen “en ningún caso”, le estamos dando la posibilidad al juez de que la inmediata libertad siempre va a estar reducida a una forma de instrumentarla, que es la excarcelación.

Con respecto a la excarcelación nosotros admitimos que es facultativa para el juez porque el artículo 317 establece con toda precisión, a través del verbo “podrá”, la facultad del juez de instrucción. Además, señor presidente, está el artículo 319, que es una norma que el juez debe tener en cuenta para todos los casos de excarcelación, por cuanto meritúa la mayor o menor gravedad del delito o la peligrosidad del delincuente, aun cuando éstos sean, término medio, pasados de moda. Pero reitero que es necesario que el juez pueda merituar cada caso en particular para decidir si admite o no un pedido de excarcelación. Por eso nos parece que como está redactado mantiene la intención de esta comisión, dejando que el artículo 319 englobe también esta posibilidad de excarcelación y permita que el juez atienda particularmente las circunstancias del caso para acceder al pedido de excarcelación o no.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º tal como ha sido leído por Secretaría.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al artículo 4º.

Sr. Secretario (PiuZZi). — El tribunal competente resolverá la situación procesal de quienes al momento de entrar en vigencia esta ley estén cumpliendo prisión preventiva en los siguientes plazos: 1) En un (1) año si el tiempo de prisión preventiva es menor a dos (2) años. 2) En seis (6)

meses si el tiempo de prisión preventiva es mayor a dos (2) años. Las disposiciones del artículo 2° de la presente ley se aplicarán a los procesos sustanciados bajo el régimen de la ley 2.372.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 4°.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — En atención a que se fijan los plazos para las situaciones existentes actualmente para que se expidan los jueces, creo que es innecesario que se establezca expresamente que las disposiciones del artículo 2° de la presente ley se aplicarán a los procesos sustanciados bajo el régimen de la ley 2.372. Sostengo esto por dos razones: en primer lugar, porque en el ordenamiento vigente ya se establece que los procesos durarán dos años. Esto está establecido en la ley 2.372; en segundo término, podría suceder que, con la prórroga de seis meses más, se quebrantara el principio de no aplicación retroactiva de una ley penal que, aparentemente, sería más gravosa dado que serían dos años y seis meses, con la prórroga que podría pedirse en cámara.

De todos modos creo que la ley 2.372 está derogada por un artículo de la ley. Sin perjuicio de la aplicación de aquellos que optaron en su momento, creo que todas las situaciones pendientes se resolverán por este artículo 4°, primera parte, propuesto por la comisión, y se eliminaría la segunda parte de dicha norma. Esta es mi sugerencia.

Sr. Alasino. — Justamente atendiendo a las observaciones formuladas por el señor senador por Jujuy, la comisión no va a aceptar esa modificación.

Esta norma está redactada en atención a la actitud que los distintos juzgados tienen en la Capital Federal y apunta precisamente a resolver esa situación. Hay juzgados que en el caso de que la ley más benigna sea de tipo procesal, no hacen jugar el principio *in dubio pro reo*; y no la aplican. Pero hay otros juzgados que sí. Lo que nosotros establecemos en este artículo es que, aun para aquellos juzgados que creen que no juega el principio de *in dubio pro reo*, en este caso específico puede jugar. Por eso nos parece oportuno y necesario para avanzar en la interpretación de lo que el proyecto pretende.

Sr. Juárez. — Para clarificar.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Voy a acatar la verticalidad de la comisión.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 4°, según fue leído por Secretaría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— El artículo 3° es de forma.

Sr. Presidente (Menem). — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

2

CONVENCION SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS

Sr. Presidente (Menem). — Pasamos a considerar ahora los órdenes del día.

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: deben ser tratados varios órdenes del día, por lo que solicito se dé lectura al número — salvo en los casos que se trate de proyectos de ley —, a fin de agilizar la sesión.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Menem). — Como hay asentimiento, se procederá a leer el número de cada orden del día, salvo en aquellos casos en que se trate de proyectos de ley, que serán enunciados, sin perjuicio de que en el Diario de Sesiones figuren como de costumbre.

En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución del señor senador de la Rúa por el que se exalta la importancia de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, firmado en Washington el 3 de marzo de 1973. (Orden del Día N° 249.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ecología y Desarrollo Humano, han considerado el proyecto de resolución del señor senador de la Rúa, exaltando la importancia de la "Convención sobre el

¹ Ver el Apéndice.

al conocerse la muerte de Humberto 1º rey de Italia. Esta sirena, como parte de la prédica periodística, se convirtió en una tradicional anunciadora de grandes acontecimientos nacionales y mundiales.

Sus bronce, placas, objetos de arte, pinturas, documentos y, en fin, todo el conjunto de esta construcción debe ser salvaguardado, ya que forman y conforman una unidad cultural indisoluble, con valor patrimonial histórico nacional.

Su destino debe necesariamente afectarse a fines de exposición y servicio hacia todos los argentinos y ciudadanos del mundo que nos visiten guardando, así, testimonio para nosotros y para nuestra posteridad de una época de la historia arquitectónica, política, periodística, cultural y social de nuestro país.

Esta iniciativa que pongo a vuestra consideración pretende preservar esta construcción magnífica y representativa, con todo el conjunto arquitectónico edilicio y sus componentes interiores. Su declaración como monumento histórico procurará el mantenimiento y cumplimiento de tal objetivo.

Su biblioteca, su célebre farola, sus bronce, placas, objetos de arte, pinturas, documentos y, en fin, todo el conjunto de esta construcción debe ser salvaguardado, ya que forman una unidad cultural indisoluble, con valor patrimonial histórico nacional.

Su declaración como monumento histórico nacional procurará el mantenimiento y cumplimiento de tal objetivo.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SNOPEK

La discusión sobre la limitación al poder penal del Estado, lamentablemente, requiere en forma continua el desarrollo de nuevos argumentos para la defensa de garantías que, sin embargo, ya han cumplido más de 200 años de historia. Esto es lo que debería surgir del recinto: argumentar en favor y en contra de la garantía que reza: *nullum crimen, nulla poena sine iudicio*; es decir, aquel principio que resguarda la exigencia más básica de una administración de justicia penal conforme con el estado de derecho: ningún individuo puede ser castigado en forma legítima sino antes de que un juez imparcial, independiente, bajo el respeto de todas las manifestaciones del derecho de defensa y luego de una producción de prueba pública y oral, formule una sentencia de condena (juicio previo). En pocas palabras: la madre de todas las garantías procesales y quizá materiales en el ámbito del derecho penal, de ella emanan el principio de inocencia, el *in dubio pro reo*, etcétera.

No se dice nada nuevo si se recuerda la vigencia práctica de este principio: las cárceles están llenas de ciudadanos inocentes, personas sobre las cuales debe caer, todavía, la única manifestación legítima sobre su culpabilidad o inocencia, ciudadanos que han sido sacados de sus casas, de su familia, de su entorno sociolaboral, afectivo, ciudadanos que están todavía sujetos a que se les diga que no son culpables luego de dos o más años de tremendo sufrimiento, de enorme "desocialización".

El proyecto que se discute pretende poner algún coto razonable a este uso indiscriminado de violencia estatal. La idea básica del proyecto que se nos somete a análisis y aprobación, reside en que si el Estado, con la lentitud propia de sus mecanismos burocráticos, no logra resolver el conflicto penal dentro de un plazo de dos años y durante esos dos años ha tenido encerrado al ciudadano procesado, no permita, a partir de ese momento, que la continuación del estado de incertidumbre se sustente sobre la limitación de la libertad del individuo. El Estado, si ello se justifica, puede contar con el tremendo instrumento de encerrar durante dos años, y a veces seis meses más, a un individuo procesado para fortalecer el aseguramiento de los propios fines del proceso, pero, y ello es indiscutiblemente razonable, todo instrumento debe estar limitado por otros objetivos netamente indelegables en el estado de derecho, y de los cuales el

propio Estado es guardián, por ejemplo, una garantía tan básica en el sistema constitucional como el respeto a la libertad ambulatoria.

Sólo se busca que la prisión preventiva no siga cumpliendo la función que le corresponde a la misma pena estatal. Hoy no caben demasiadas dudas de que ante la exigencia de enviar lo antes posible un mensaje de confirmación del valor protegido por la norma, luego de producido el delito, y sumado a la crónica lentitud de los sistemas de justicia penal de toda América latina, se utiliza a la prisión preventiva como instrumento —absolutamente ilegítimo— de la prevención general —positiva—. En este punto la mala influencia de los medios de comunicación social es evidente.

Si nos detuviéramos unos minutos a repasar cuál es el origen funcional de la prisión preventiva veremos que ella nace muy unida a los costos producidos por la necesidad de vigencia de otra garantía básica de la justicia penal como es el derecho de defensa. La garantía del derecho de defensa implicó, desde un comienzo, la necesidad de que el imputado estuviera presente al momento de producción de las pruebas durante el desarrollo del debate —juicio oral—. Ello obligaba, en caso de fuga del imputado, a la suspensión del debate, es decir a la no realización del juicio y la correspondiente obstrucción de la aplicación de la justicia penal. De allí nace la razón por la cual el Estado debe, en ocasiones, retener al imputado asegurando su presencia en este momento. El único fundamento entonces del uso de este grave instrumento procesal, que respeta el origen político criminal de la figura es el peligro de fuga; nada tienen que hacer aquí consideraciones de índole material como la naturaleza del delito cometido. Ello marca la necesidad, sin ninguna duda, de un uso excepcional de la medida, toda vez que no siempre existe peligro de fuga o que, aún demostrado este peligro, es posible anularlo con una medida menos violenta como, por ejemplo, el arresto domiciliario.

Además, debemos alejar el fantasma equívoco y peligroso de la inseguridad. La aplicación de esta ley no aumentará los niveles de inseguridad. En primer lugar, porque la aplicación inmediata de esta ley no beneficiará a más de 650 internos procesados que ya han sufrido, siendo todavía inocentes, el castigo carcelario durante una enormidad de tiempo.

En segundo lugar, porque la inseguridad ciudadana está más vinculada al desarrollo de políticas preventivas y de asistencia a la víctima que a la violación sistemática de los derechos individuales de los procesados.

Una justicia penal alejada del estado de derecho no mejora, de ningún modo, el nivel de seguridad ciudadana.

En tercer lugar, la imposibilidad de aplicación de la prisión preventiva no implicará, claro está, que el sistema procesal penal no pueda acudir a otras medidas asegurativas de los fines del proceso alternativas a la privación de la libertad (detención domiciliaria, obligación de ausentarse de una localidad, obligación de presentarse en el tribunal cada cierto tiempo, etcétera).

Es preciso, que tengamos clara conciencia de que a nivel universal e, incluso, dentro de nuestra evolución histórica, este proyecto no representa más que un modelo razonable de coerción procesal y, no es, de ningún modo, el sistema más beneficioso para el procesado. A nivel mundial, muchos países utilizan plazos menores y, nuestro propio régimen procesal anterior al vigente, inquisitivo y anticuado, establecía un límite nunca superable de dos años, límite luego desnaturalizado en forma totalmente injustificada por nuestra jurisprudencia.

Por último, nuestras cárceles, deben cumplir con el imperativo legal y ético de resocializar a quien ha cometido un ilícito, ninguna resocialización es posible en condiciones de hacinamiento, asimismo la causal más protagónica de ese hacinamiento, es la sobrepoblación carcelaria, y el 57% de los presos son procesados. Ello nos indica el camino para el mejoramiento del sistema carcelario, para la dignificación de la justicia penal, y para el propio enaltecimiento de la labor como legisladores en busca del estado de derecho.

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-124/93) instituyendo un régimen de financiamiento destinado al pago del IVA, en las operaciones con bienes de capital y aquellas relacionadas con la actividad minera; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

el Senado y Cámara de Diputados, etc.

REGIMEN DE FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 1º — Institúyese un régimen de financiamiento, destinado al pago del impuesto al valor agregado que grave:

- Las operaciones de compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos;
- Las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera, de conformidad a las disposiciones de la presente ley.

Art. 2º — Son beneficiarios de este régimen, los adquirentes o importadores de los referidos bienes, en tanto los mismos sean destinados al proceso productivo orientado hacia la venta en el mercado externo, y los sujetos acogidos al régimen de la ley 24.190 que realicen inversiones en obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la producción de bienes destinados a la exportación.

Art. 3º — A los fines previstos en el artículo anterior, se entenderá que el proceso productivo se encuentra orientado hacia la venta en el mercado externo conforme a los requisitos y condiciones que al respecto establezca la autoridad de aplicación.

El incumplimiento de las condiciones dispuestas hará decaer la franquicia otorgada, en cuyo caso los beneficiarios deberán reintegrar al fisco, los intereses que éste hubiera tomado a su cargo, en la forma y condiciones que al respecto establezca la autoridad de aplicación, la que podrá asimismo aplicar una sanción graduable entre el cincuenta por ciento (50 %) y el ciento por ciento (100 %) de los referidos intereses.

Art. 4º — El presente régimen se implementará a través de una línea de créditos, que las entidades financieras regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones podrán otorgar a los sujetos mencionados en el artículo 2º, destinados al pago del impuesto indicado en el artículo 1º.

Art. 5º — El Estado nacional compensará a las entidades financieras por los créditos previstos precedentemente, con una retribución que no podrá superar el equivalente al doce por ciento (12 %) de tasa efectiva anual aplicable sobre los mismos.

Art. 6º — La retribución a la que se refiere el artículo anterior se efectivizará, permitiendo que las entidades financieras que adhieran al régimen, computen como pago a cuenta en sus liquidaciones del impuesto al valor agregado, el importe de la retribución dispuesta en el artículo anterior que mensualmente corresponda por los créditos otorgados.

Art. 7º — Quedan comprendidas en las disposiciones del presente régimen las compras o importaciones definitivas de los bienes que se detallen en los listados que a tal efecto confeccionará la autoridad de aplicación, y las inversiones en obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria de operación de procesos productivos, en la medida en que cumplieren lo dispuesto en el artículo 2º efectuadas por sujetos acogidos al régimen de la ley 24.196.

Art. 8º — Los créditos amparados por el presente régimen deberán cancelarse en los plazos que se establezcan en los listados a que se refiere el artículo anterior, según lo disponga la autoridad de aplicación de acuerdo a las características de las inversiones y los distintos tipos de bienes que resulten comprendidos, los que en ningún caso podrán superar los términos que al respecto fije el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 9º — Las entidades financieras intervinientes exigirán a los beneficiarios de los créditos la constitución

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

Art. 11. — La autoridad de aplicación del presente régimen será la Secretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, quedando facultada para interpretar y determinar en cada caso sus alcances y para dictar las disposiciones pertinentes, pudiendo requerir a tal efecto la colaboración de las secretarías de Industria, de Minería y de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 12. — Facúltase al Poder Ejecutivo para modificar la graduación de la sanción prevista en el segundo párrafo del artículo 3º y el porcentaje de la tasa efectiva anual establecida en el artículo 5º.

Art. 13. — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para las inversiones que se realicen entre dicha fecha y la que fije el Poder Ejecutivo como plazo de finalización del régimen.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Minería - Honorable Cámara de Senadores.

Art. 11. — La autoridad de aplicación de la presente ley será fijada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada para interpretar y determinar en cada caso sus alcances y para dictar las disposiciones pertinentes.

Id.

Id.

Id.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO FERIS

Reforma al Código Penal

Señor presidente: la reforma al Código Penal en tratamiento, que tiene su origen en un proyecto del Poder Ejecutivo, propone limitar el tiempo de encarcelamiento de aquel que teniendo prisión preventiva no cuenta con sentencia. Y lo hace de dos maneras: una, mediante la excarcelación casi automática del imputado al término de los dos años de detención; otra, beneficiándolo con el doble cómputo del tiempo de prisión o reclusión.

Para el tratamiento de este tema debe meritarse cuál es el fin perseguido en el proyecto, puesto que tiene una importante repercusión social, sobre todo en momentos en que se observa el incremento de la delincuencia en todo el país.

Así, debe tenerse perfectamente en claro si el objetivo es que los detenidos sin condena puedan recuperar la libertad al cabo de los dos años, o que se agilicen los procesos y se preserve la integridad de la persona que se presume inocente.

Creo que un objetivo deshecha al otro, pues contrariamente a lo que este proyecto propone en teoría, en la práctica ambos fines serán contrapuestos.

En efecto señor presidente, el proyecto en estudio propicia que cumplidos los dos años y seis meses de detención —sin que exista condena— automáticamente quedará excarcelado quien esté imputado en una causa, cualquiera sea la gravedad del delito.

De esta forma no tengamos la menor duda de que el mejor abogado defensor será aquel que logre, mediante

excepciones, recursos y otras defensas procesales, llegar a los dos años y seis meses sin que el juez de la causa pueda dictar sentencia, consiguiendo así que su defendido logre la libertad ambulatoria y burle el sentido de la ley penal.

Debemos tener en cuenta que quienes actualmente cumplen prisión preventiva son aquellos procesados por uno o más delitos cuya pena excede los 8 años de prisión, o bien tenga condenas anteriores, así podrán gozar de este nuevo beneficio quienes estén acusados por delitos graves, tales como homicidio doloso en todas sus formas, secuestro extorsivo, robo agravado, traición a la patria y otros delitos de semejante gravedad.

La misión de administrar justicia ha sido, desde los comienzos de las sociedades humanas, atributo propio de la soberanía. El Estado es el censor legal de las pasiones humanas y el centinela avanzado de la moral de las naciones civilizadas.

Actualmente, nuestros tribunales han aplicado el beneficio de dos años como máximo para aquellos procesados que no tuvieran condena pero no en forma automática, sino luego de un estudio pormenorizado de cada caso.

Así, la sana doctrina y la jurisprudencia penal, aconsejan no tener en cuenta aquellos actos procesales dilatorios que intente el defensor, a los fines del cómputo de la prisión preventiva, conocidos también como “chicanas procesales” dentro del ámbito tribunalicio, que sólo tienen como objeto obstaculizar el proceso.

Es decir que actualmente, se concede el beneficio pero restándole el tiempo insumido en actos procesales

que tiene origen en una solicitud del procesado, cuando a juicio del tribunal hayan tenido como efecto retrasar el curso del proceso.

Por ello, aprobar este proyecto es alentar la deslealtad procesal ante el tribunal, en detrimento del fin perseguido por la ley y la justicia, el cual es la investigación de los hechos y el castigo del delito.

Sin lugar a dudas, los procesos se volverán más lentos en los casos de delitos graves en que la situación del imputado se encuentre comprometida, debido a que la defensa tratará por todos los medios de que no haya sentencia durante dos años y seis meses.

Una justicia lenta, un proceso prolongado y tedioso, conlleva a la injusticia de mantener en la incertidumbre a quien se encuentra privado preventivamente de su libertad, como también a la gran injusticia de no hacerse justicia.

Por ello, la víctima de un delito que no ve llegar a tiempo una sentencia condenatoria, describirá de nuestro sistema judicial y del orden jurídico en general. Y esto es lo más grave que le puede suceder a un pueblo.

Nuestra justicia toda —la penal no es la excepción— se encuentra en crisis. El estado en que se encuentra la infraestructura edilicia del Poder Judicial resulta francamente alarmante. Los edificios se cierran por falta de seguridad, ello ha sucedido en la justicia laboral por muchos meses y respecto de la civil estamos a casi un año del cierre de uno de los principales edificios en esta Capital Federal y aún continúan algunos juzgados sin funcionar.

Actualmente también se teme por la seguridad de un edificio que alberga a juzgados comerciales, donde los expedientes que se encuentran en pleno trámite son llevados al archivo —ubicado en la planta baja— para eliminar peso a los pisos superiores.

A ello se suma la baja remuneración de sus empleados, que no tienen la categoría de funcionarios, pero que el magistrado delega en ellos la responsabilidad de llevar causas, dirigir audiencias y demás tareas esenciales para llevar adelante un juzgado.

Con estos elementos no puede esperarse sino una justicia lenta, un proceso penal prolongado y tedioso, por falta de material humano y tecnológico.

Podré no ser original al decir que "la justicia tardía no es justicia", pero es una frase que encierra una verdad irrefutable. Cuando el ciudadano no encuentra respuestas en el Poder Judicial, lamentablemente las buscará por mano propia o asumirá estoicamente la impunidad del delincuente.

Por ello, creo firmemente que no debe buscarse la solución en proyectos que permitan la existencia de un mayor grado de impunidad, sino en el fortalecimiento de una justicia digna que permita la atención y resolución de las causas a su estudio.

El problema del abarrotamiento de los juzgados penales como también el hacinamiento en los institutos penitenciarios no lo solucionaremos con este proyecto que ataca los efectos pero no las causas.

El forzoso trato y contacto con los criminales corrompe a los hombres relativamente honestos y empeora a los dudosos y vacilantes.

Desde hace muchos años las cárceles se han convertido en una especie de clubes de delincuentes. Allí es

donde se reúnen, cambian ideas, recíprocamente se depravan, aprenden sus engaños y donde se crean verdaderas bandas que planifican nuevos golpes para cuando se encuentren en libertad.

Con el proyecto en tratamiento se pretende cumplir con lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica. Yo aplaudo esta iniciativa, pero opino sin lugar a dudas que sería más conveniente para el país cumplir acabadamente con otra disposición mucho más importante. Me refiero al artículo 5º inciso 4 que prescribe que "los procesados deben estar separados de los condenados salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas".

Es evidente que haremos mucho más por el detenido preventivamente si adoptamos una decisión de fondo en materia de política carcelaria que estableciendo un límite de detención como el que aquí se propone.

Para un inocente es mucho más grave convivir durante dos años con delincuentes, en la realidad de los actuales institutos penitenciarios, que pasar mayor tiempo en prisión pero en un lugar más digno y adecuado a su condición de inocente, hasta que se pruebe lo contrario.

El inciso 1º del artículo 5º del Pacto de San José de Costa Rica establece el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral. Y yo me pregunto señor presidente, ¿quién se puede sentir protegido compartiendo la celda con peligrosos delincuentes condenados a varios años de reclusión?

No será necesario esperar dos años. En menos de dos meses habrá sufrido violencia física y moral, y deberá tener una gran fortaleza espiritual para mantener la integridad psíquica.

Esa es la realidad del sistema penitenciario argentino y nada se hace por reparar semejante anomalía.

El Estado nacional debe emprender ya mismo una política carcelaria y judicial coordinada para dotar a nuestra Nación de los elementos necesarios, tanto en materia de recursos humanos como en los materiales para que pueda funcionar correctamente.

Encuentro razón a quienes piensan en aquellos que se hallan transitoriamente privados de su libertad, cuando debe prevalecer la inocencia, pero no creo que pueda serle útil a ese inocente que se le compute doblemente el tiempo de detención en prisión preventiva.

Su inocencia deberá conllevar al sobreseimiento, por lo que este instituto no lo favorecerá. En cambio se beneficiará a quien resulte condenado, toda vez que se acortará sensiblemente el tiempo de reclusión.

En un sistema de plenas garantías como el nuestro, donde el ciudadano las ejerce mediante el principio de inocencia, la impugnación de los actos procesales y la vía recursiva de las decisiones del juez por ante la Cámara de Apelaciones o ante el máximo tribunal —por decisiones tales como la denegación del beneficio de excarcelación—, el límite de dos años propuesto tendrá como efecto que los abogados defensores planteen innumerables impugnaciones y recursos, promuevan recusaciones y demás defensas con el único fin de obstaculizar el trámite procesal, dilatando sucesivamente la posibilidad del dictado de la sentencia.

No tengo la menor duda de que si actualmente los procesos penales duran demasiado tiempo, la aprobación

de este proyecto producirá que ninguno tarde menos de dos años y medio, por lo menos en aquellos casos de delitos graves donde el procesado sea culpable.

Creo entonces que debemos tener en cuenta principalmente al sujeto pasivo, es decir al ciudadano que cumple la ley y es potencial o efectiva presa del agente delictivo.

¿Cómo podremos explicarle a la víctima de un delito que quien le produjo el daño ha sido excarcelado porque la justicia se encuentra abarrotada de expedientes?

Entonces, si tenemos en cuenta a la víctima potencial, es decir a la sociedad toda, como la parte a quien debemos dar una respuesta, no puedo sino oponerme a este proyecto.

El hombre de la calle necesita respuestas concretas a su falta de seguridad personal, la de su familia y la de sus bienes.

Jiménez de Asúa refiriéndose a otro instituto, pero que guarda similitud con el tema en tratamiento, expresó que "la condena condicional se funda en un enorme error: la determinación a priori de la carencia de peligro de ciertos criminales, el acto insignificante de un delincuente primario puede ser un paréntesis aislado en su vida, pero también puede ser el síntoma primero de su estado peligroso de naturaleza continua. Esto a priori no puede decidirse. Renunciar, en tal caso, a la medida correctiva, educadora y de defensa que la pena representa, es aumentar la criminalidad en vez de restringirla".

No se pretende tomar al pie de la letra este pensamiento, que fue expresado en otro tiempo y en otras épocas, pero tampoco pasar al otro extremo.

Es por ello, señor presidente, que voy a votar negativamente el dictamen de comisión.